

**Comisión sobre Seguridad Humana - Universidad para la Paz -
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Reunión de Expertos
San José, Costa Rica, 1 de diciembre de 2001**

**“Relación entre Derechos Humanos y Seguridad Humana”
Documento de trabajo**

Justificación: El presente es un documento de trabajo para la reunión de expertos del 1 de diciembre de 2001, que servirá de sesión de trabajo preparatoria para la reunión de los miembros de la Commission on Human Security que se realizará en el mes de diciembre de 2001 en Japón. En tal sentido, no tiene carácter de ensayo ni de documento conclusivo alguno. Únicamente pretende tender líneas de discusión sobre varios temas relacionados con la seguridad humana, específicamente, con los avances conceptuales y los principales temas que abarca su estudio y la incidencia de los derechos humanos en su dimensión universal e integral en su concepto. Como anexo al documento se presenta información que puede servir como guía para el estudio de un caso concreto: el caso de Colombia.

I. Antecedentes y consideraciones conceptuales

“Human security” is not defined in international law, but it does provide a useful complement to the legally based concept of refugee protection. Since the end of the Cold War, human security and security threats came much less from external aggression, and more from internal tensions. It was necessary, to shift some international attention from the security of borders to that of people, inside and across borders. The main security issues are, therefore: land mines, small arms, children in armed conflict, humanitarian law, human rights and so on.¹

¹ Cf. Statement by Mrs Sadako Ogata. United Nations High Commissioner for Refugees, to the 57 th. Session of the United Nations Commission on Human Rights. Geneva, 11 April 2000.

Pero lejos de ser un concepto estático, el de seguridad humana, se ha visto enriquecido por una constante dinámica que ha contribuido a agregar circunstancias y características que lo sitúan en un nivel conceptual cada vez más integral y universal. Si bien en un principio de su desarrollo conceptual, como se indicó en el párrafo anterior, era preponderante entender la seguridad humana de las personas en las condiciones de conflicto armado externo o interno en relación con situaciones de éxodo y violaciones al derecho a la vida e integridad de colectividades, incluyendo las situaciones de post conflicto, actualmente es vital relacionar el papel del individuo en cuanto a la necesidad de la satisfacción de sus necesidades más elementales y no solo si se encuentra dentro de un contexto de conflicto o postconflicto armado.

This reconceptualization leads to the dual concept of *state security* and *human security*. The meaning of human security is synonymous with that of “the security of people” and “societal security” is incorporated into it.

Con ello, el concepto de seguridad humana es más rico, pero a la vez más complejo. Vemos cómo se perfila un acercamiento –aunque no deben verse como sinónimos- con la idea de “desarrollo humano” en cuanto se pretende la realización de la persona humana dentro de un nivel mínimo de calidad de vida y, por ende, de satisfacción de todos sus derechos humanos sin distinción, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales en comunión con un medio ambiente sano y sostenible. En esa forma, se establece la triada: seguridad humana, desarrollo humano, derechos humanos.

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan

Human security in its broadest sense, embraces far more than the absence of violent conflict. It encompasses human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her own potential. Every step in this direction is

also a step towards reducing poverty, achieving economic growth and preventing conflict. Freedom from want, freedom from fear and the freedom of future generations to inherit a healthy natural environment –these are the interrelated building blocks of human- and therefore national security.

Esta evolución conceptual se inicia con el concepto mismo de “seguridad”, el cual comenzó a ser modificado al inicio de los noventa cuando se superó el tradicional enfoque referido a la protección de la soberanía y el territorio de un Estado ante amenazas externas o internas hacia la ubicación del ser humano como sujeto principal. Se insiste que el concepto de seguridad debe cambiar de dos formas: de un enfoque exclusivo en la seguridad territorial a uno mayor sobre la seguridad de las personas; y de la seguridad a través del armamentismo hacia la seguridad mediante el desarrollo humano.² Así, el UNPD hace un llamado para utilizar las reducciones en gastos de defensa para financiar el desarrollo humano en el entendido de que gran parte de las amenazas a la seguridad humana se originan en la pobreza y la falta de oportunidades.

UNPD acuñó desde 1993 el concepto de “seguridad humana” para ampliarlo, en su Informe de Desarrollo Humano de 1994, hacia dos componentes principales:

1. Seguridad ante amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión y,
2. Protección contra alteraciones súbitas y violentas en el modo de vida.

Incluso se ha llegado a establecer la siguiente tipología o clasificación de “seguridad humana”:

- seguridad económica
- seguridad política

² Cf. Brenes, Arnoldo. *Amenazas a la Seguridad en Centroamérica: ¿Se justifican las respuestas militares?* Diálogo Centroamericano.

- seguridad alimentaria
- seguridad en la salud
- seguridad ambiental
- seguridad personal
- seguridad de la comunidad

También se ha esbozado el concepto de “seguridad global”, el cual hace énfasis en la seguridad de las personas y del planeta, en especial, ante la amenaza ecológica.

Independientemente del concepto que se quiera adoptar, es lo cierto que tampoco se pretende que la seguridad de las personas reemplace la seguridad de los Estados, sino que deben ser vistas como igualmente importantes y complementarias. De ahí que no se excluyen las amenazas militares de la agenda de seguridad, pero se aboga por una definición más amplia, especialmente de cara a los retos humanitarios, solidarios y universales. Dentro de esa lógica, los Estados no estarán nunca seguros si sus ciudadanos no lo están, como tampoco lo estarán las personas y los Estados si hay deterioro del medio ambiente.

Paralelamente importante con el aspecto conceptual, es la respuesta que debe darse para superar la inseguridad humana: ¿respuesta militar? (Cuando hay ataques a la soberanía o al territorio, incluyendo el conflicto armado interno); ¿respuesta civil? (Cuando se trate de exclusión y pobreza, desigualdad, delincuencia, deterioro ambiental, etc.).

Tratándose del enfoque amplio de seguridad humana, las amenazas más apremiantes se ubican a nivel interno, ya que están originadas en factores estructurales como la pobreza, las enfermedades, crisis políticas, daño al medio ambiente, corrupción institucionalizada, etc.

En síntesis, lo que debe quedar claro es que la problemática de la seguridad humana sufre constantes cambios importantes en su conceptualización, según sean las nuevas circunstancias que inciden en su tratamiento. Es así como debe agregarse una preocupación

mayor con la actual crisis provocada por el terrorismo internacional y las medidas a tomar para su erradicación dentro de un balance entre la erradicación de ese flagelo y el respecto a los derechos humanos de todas las personas. Iguales previsiones deben hacerse en relación con nuevas amenazas a la seguridad de nuestras sociedades como las siguientes, que deben estar en la agenda de la seguridad humana:

- la droga y los delitos conexos
- el tráfico ilícito de armas
- la falta de tratamiento oportuno a las causas de las migraciones forzadas
- el aumento de la violencia interna y las nuevas formas de delincuencia y de delitos contra las personas y los bienes
- la proliferación de nuevas enfermedades o enfermedades que se consideraban casi erradicadas
- el problema del VIH/SIDA
- landmines
- child soldiers
- las grandes desigualdades y falta de reglas claras dentro del comercio mundial.

Professor Amartya Sen, talking about human security,³ establish several levels of concerns: Security of Survival (health, peace and tolerance); daily life and the quality of living; information and ecology; dignity, equity and solidarity; globalization and a global commitment; international arrangements and global architecture.

- Security of survival has to do with the prospects have been made less favourable in many parts of the world through problems in public health –including the emergence and spread of particular diseases, such as AIDS, new types of malaria, drug-resistant TB., and so on. Similarly, in the growing persistence and sometimes accentuation of civil

³ Amartya Sen. *Why Human Security?*. Keynote speech. International Symposium on Human Security. Tokyo, 28 June 2000.

wars and associated killings, there is a continuing and worsening threat to survival of civilians caught in the battle of armies and in sectarian genocide or persecution.

- Daily life and the quality of living represent a balance between the old slogan of “growth with equity” and “downturn with security”, given the fact that occasional downturns are common –possibly inescapable- in market economies. In achieving security under these circumstances, and in trying to guarantee secure daily living in general, we need social and economic provisions (so-called “economic safety nets” and the guaranteeing of basic education and health care), but also political participation, especially by the weak and the vulnerable. Since their voice is vitally important. By the other hand, the need to confront insecurity of daily lives may arise in other ways as well. When the victims remain severely deprived not because of an economic downturn, but because of persistent neglect of social and economic institutions (such as schools, hospitals, etc.) on a chronic basis, what is needed is a better understanding of the failure of governance involved in these long-term lacunae and a greater determination to make provisions for these vital necessities.
- The access to the new technology is severely limited not only through economic penury, but also through educational inadequacy. It is important to shift our attention from the positive merits of information technologies to the negative dangers of ecological neglect (preservation of the global environment demands particular attention from those tend to make the biggest contribution to the fouling of our air, water, temperature balance, and other implicit sources of secure and happy living.
- Human dignity must involve issues as women`s movements and substantial progress in helping to achieve gender equity in may different societies. Other cases relating discrimination for class, caste, ethnicity, social opportunity, economic resources, also call for clearer recognition. Development is not only about the growth of GNP per head, but also about the expansion of human freedom and dignity.⁴

⁴ Kofi Annan, “We the People: The Role of the United Nation in the Twenty-First Century”, United Nations, New York, 2000.

- Globalization and a global commitment has to do with different signs that can be seen right now which point to a growing commitment across the world to confront inequality and insecurity with greater global solidarity. The commitment may find “official” expression in the work of international bodies, or “anti-official” expression in street protest that criticize the role of one international body or another. The benefits of global contact and interaction applies to economic relations, among other relations. The economic predicament of the poor across the world cannot be reversed by withholding from them the great advantages of contemporary technology, the well-established efficiency of international trade and exchange, and the social as well as economic merits of living in open rather than closed societies.

II. Existing human rights norms and instruments in support of Human Security

No existen normas o instrumentos internacionales específicos sobre la Seguridad Humana. Hay documentos de Naciones Unidas con cobertura más general o concreta vinculados indirectamente con la seguridad humana con un importante desarrollo previo como el Derecho Humanitario, el Derecho de los Refugiados y el Desarrollo Humano Sostenible.

Igualmente, se han producido iniciativas recientes dentro de Naciones Unidas que informan de un interés cada vez más marcado por destacar esfuerzos para lograr una sistematización de principios y normas inherentes a la seguridad humana. La mayoría de esas actividades, incluyendo los informes de expertos y relatores de Naciones Unidas, se vinculan con la visión conceptual originaria de la seguridad humana y los temas más apremiantes como los desplazados internos y externos por conflicto armado, las situaciones post- conflicto armado, los éxodos masivos, etc. Sobre la visión más amplia e integral del concepto de seguridad humana, los documentos emitidos por el UNDP son los más numerosos y representativos de esa temática. Cabe destacar el trabajo desarrollado en las distintas

Conferencias y Cumbres Mundiales de las Naciones Unidas donde se ha realizado esfuerzos importantes por incluir temas sobre seguridad humana, aún cuando los temas centrales de esas Reuniones sean otros asuntos conexos.

Un estudio de todos los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas arroja la siguiente lista que guarda relación, por conexidad, con la seguridad humana.

Nombre del instrumento
Charter of the United Nations
Universal Declaration of Human Rights
International Covenants on Civil and Political Rights, and Economic, Social and Cultural Rights
Convention and Protocol relating to the Status of Refugees
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
Principles of International Co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity
Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of victims of International Armed Conflicts (Protocol I)
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live

Declaration on Territorial Asylum
Proclamation of Teheran
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions
Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples
Declaration on Social Progress and Development
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interest of Peace and for the Benefit of Mankind
Declaration on the Right of Peoples to Peace
Declaration on the Right to Development
Convention on the Reduction of Statelessness
Convention relating to the Status of Stateless Persons
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

*La Seguridad Humana en las más recientes Conferencias Internacionales*⁵

Las Conferencias Mundiales sobre Derechos Humanos convocadas por las Naciones Unidas a partir de 1990, se han convertido en verdaderos foros de discusión trabajados por la fórmula del consenso, lo que les brinda legítimo interés en el abordaje de dichos temas, especialmente porque han participado también todos los actores de la sociedad internacional (gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil). Si bien cada Conferencia ha sido convocada para un tema específico, es lo cierto que siempre tratan de tener un enfoque integral de los derechos humanos a partir de la premisa, cada vez más reiterada, de que los derechos y libertades fundamentales de las personas son universales, interdependientes, indivisibles y de igual jerarquía.

Los instrumentos emanados de estas cumbres son documentos jurídicos de vital importancia. Por lo general se aprueban “Declaraciones” con líneas y directrices políticas o programas de acción con compromisos gubernamentales y medidas concretas para cumplir los objetivos acordados en el foro. Sin embargo, en algunos encuentros se han aprobado incluso convenios internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Si bien no existe una Conferencia o Cumbre Mundial específica sobre “Seguridad Humana”, es lo cierto que de alguna forma se hacen abordajes y traslapes al tema, siendo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague y la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Estambul, 1996, las que más profundizan sobre dicha problemática.

Una panorámica general al contenido de esas Conferencias, en relación con la seguridad humana, se presenta en el siguiente cuadro.

⁵ Un desarrollo más amplio sobre las Conferencias Internacionales en general puede verse en: SALVIOLI, (Fabián Omar). *Los Derechos Humanos en las Conferencias Internacionales de la última década del Siglo XX*. Instituto de Relaciones Internacionales UNLP-PNUD, 1999.

CONFERENCIA	CONTENIDO
<p>1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, 1992.</p>	<p>Reflejó la complejidad de la situación que marca que tanto la pobreza como el excesivo consumo por parte de las poblaciones ricas, someten al medio ambiente a tensiones nocivas. Se destaca la relación indisoluble entre medio ambiente y derechos humanos al afirmar que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. En cuanto al derecho al desarrollo señala que este debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras y que para alcanzar el desarrollo sostenible es indispensable que la protección del medio ambiente forma parte integrante del proceso de desarrollo. Se agrega categóricamente que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables y se insta a todos los Estados y personas para la cooperación en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Otros aspectos que toca son: derechos a la salud, educación el cumplimiento de algunas normas de derecho internacional humanitario, particularmente las que se refieren a la protección del ambiente.</p>
<p>2. Conferencia Mundial sobre derechos humanos. Viena, 1993</p>	<p>El Programa de Acción de Viena establece puntos que corresponden al aumento de la coordinación en la esfera de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas; a la igualdad, la dignidad y la tolerancia; a la cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos; a la educación en materia de derechos humanos, a la aplicación y métodos de vigilancia de derechos humanos y a las actividades</p>

	<p>complementarias de la Conferencia Mundial. Se reafirma <i>que el derecho al desarrollo debe ser realidad y llevarse a la práctica</i> y se propone examinar los Protocolos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se aborda la educación como un derecho humano y los derechos humanos como contenidos de los programas educativos, incluyendo la <i>educación para la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia social.</i></p>
<p>3. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 1994.</p>	<p>En su Programa de Acción hay un destaque de los derechos y necesidades de las poblaciones indígenas y se aboga por el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos de personas asiladas, refugiadas, desplazadas y migrantes. <i>Se destaca el derecho al desarrollo como un derecho humano fundamental y se afirma que la persona humana es el sujeto central del desarrollo;</i> se subraya la relación entre el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos; se fija como uno de los objetivos la erradicación de la pobreza y se abordan cuestiones que hacen al derecho a la salud física y mental, incluida la salud reproductiva, la alimentación, el vestido y la vivienda.</p>
<p>4. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Copenhague, 1995.</p>	<p>El Tercer Capítulo de la Segunda Parte de la Declaración de Copenhague cita diez compromisos con implicación directa a los derechos humanos y al derecho al desarrollo: <i>crear un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permita el logro del desarrollo social;</i> lograr el objetivo de la erradicación de la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la cooperación internacional; promover el pleno empleo y la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas basadas en la promoción y protección de todos los</p>

	<p>derechos humanos, así como en la no discriminación, la tolerancia el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la seguridad y la participación de todas las personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidas y vulnerables. En la misma Declaración se destaca que <i>el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que aquellos no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad, o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.</i> También se hace hincapié en las desigualdades sociales, la pobreza, el desempleo y la desintegración social que conllevan marginación y violencia; se aborda el problema de mujeres, niños, ancianos, refugiados y desplazados internos. Se señalan como las principales fuentes de trastorno social, el hambre, la malnutrición, la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, la drogadicción, el tráfico ilícito de armas, la intolerancia y la xenofobia. Finalmente, los Estados se proponen reafirmar y promover la realización universal del derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocer y apoyar a las poblaciones indígenas que procuran alcanzar el desarrollo económico y social; fortalecer las políticas y los programas que puedan mejorar, asegurar y ampliar la participación de la mujer en todas las esferas; crear las condiciones que permitan la repatriación voluntaria de los refugiados y desatacar la importancia del retorno a sus familias, de todos los prisioneros de guerra, las personas desaparecidas en acción y los rehenes, de conformidad con las Convenciones Internacionales.</p>
5. Segunda Conferencia	En el Programa de Acción se proporciona un instrumento eficaz

<p><i>sobre Asentamientos Humanos. Estambul, 1996.</i></p>	<p>para la creación de asentamientos humanos sostenibles en el Siglo XXI en lo concerniente al medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo social, las mujeres y la población. Además, los Estados participantes suscribieron una <i>visión política, económica, ambiental, ética y espiritual de los asentamientos humanos basada en los principios de igualdad, solidaridad, asociación, dignidad humana, respeto y cooperación</i> y aprovechan la oportunidad para hacer propios los objetivos universales de garantizar una vivienda adecuada para todos, mediante el logro progresivo. Sobre derecho humanitario, el Programa de Habitat indica que deben apoyarse la labor de remoción de minas terrestres antipersonales inmediatamente después del cese de un conflicto armado y la función de las entidades relacionadas con la Cruz roja y de la Media Luna Roja, a que en tiempo de conflicto armado adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos y las personas desplazadas.</p>
<p><i>6. Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma, 1996.</i></p>	<p>El Plan de Acción crea el concepto de “seguridad alimentaria” y estipula que <i>alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano convenidos en las últimas conferencias internacionales.</i>⁶ También se mencionan los compromisos adquiridos en otras Cumbres como la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague.</p>
<p><i>7. Novena Conferencia sobre Comercio y Desarrollo. Midrand, 1996.</i></p>	<p>El documento final afirma que es esencial para el desarrollo social que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo como parte integrante de los derechos humanos fundamentales.</p>

⁶ Plan de Acción de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, punto 10.

	<p>Se señala con preocupación la perpetuación de las disparidades entre naciones y en el seno de éstas, el aumento de la pobreza. Se indica que <i>integrando las preocupaciones ambientales y de desarrollo y prestándoles mayor atención, se logrará satisfacer las necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida de todos, proteger y gestionar mejor los ecosistemas y ofrecer un futuro más seguro y próspero.</i></p>
<p>8. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Pekín, 1995.</p>	<p>La Declaración de Pekín señala la necesidad de asegurar el respeto al derecho internacional, incluido el derecho humanitario, a fin de proteger a las mujeres y niñas en general. Entre los objetivos estratégicos para enfrentar el problema de los conflictos armados y sus consecuencias sobre la mujer, la Plataforma de Acción de Pekín impulsa el incremento de la participación de la mujer en la solución de los conflictos a nivel de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole, o bajo ocupación extranjera; reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de armamentos; propiciar formas no violentas de solución de conflictos y <i>reducir la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones de conflicto; promover la contribución de la mujer al logro de una cultura de paz; proteger a la mujeres refugiadas, las desplazadas que necesiten protección internacional y las desplazadas internas.</i> También desarrolla aspectos en relación con la mujer y la economía, promoviendo la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el derecho al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos; facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, al empleo, los mercados y el comercio.</p>

Special Reports and other UN documents

1. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the Security Council on 31st January 1992, An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping

This report of former UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali, is his introduction of human security in relation to peacemaking, peacekeeping and post conflict peacebuilding. It is important for its discussion of the end of the Cold War and its impact on the direction of international security. It is a significant precursor to the human security debate insofar as it introduces, defines and expands upon the concepts of “preventive diplomacy”; peacemaking, peacekeeping and post-conflict peacebuilding. In the last few years, all of these concepts have become increasingly intertwined with national and human security. Boutros-Ghali was one of the first international statesmen to advocate taking an “integrated approach to human security” and thus encouraged all States, regional actors, NGO’s and particularly the UN system to adopt the principles as the means to securing a more peaceful world.

2. UNDP, Human Development Report 1993- People’s Participation.

This Human Development Report is the first to call for a new people-centered word order, one of the 5 pillars of which is the concept of “human security” which lays emphasis on the security of individuals, rather than nations per se, stating “the concept of security must change –from an exclusive stress on national security to food, employment and environmental security”. The report discusses progress in the realm of demilitarisation, but at the same time calls for the creation of a permanent rapid deployment force under the mandate of the UN. There is also a plea to work on the longer-term conflict resolution solutions of “faster economic development, greater social justice and more people’s

participation ...[for] the new concepts of human security demand people-centered development.”

3. UNDP, Human Development Report 1994 – New Dimensions of Human Security.

This is probably the first comprehensive attempt to define “human security”. Threats to human security can be accordingly considered under the following 7 categories: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security.

Human Security is identified as a universal need that emphasises the interdependence of all people, for many of the threats to human security cross borders and are common to people everywhere (e.g. unemployment, poverty, terrorism, ethnic disputes, pollution). Human Security is ultimately concerned with preventive measures related to how people live in society, whether they have access to health care and to social, economic and educational opportunities, and whether they live in conflict or peace.

The report makes the important point that human security is not simply synonymous with human development, which is about widening people’s economic choices. Human security is moreover about people being able to exercise these choices safely and freely.

4. Secretary-General’s Report to the United Nations Security Council 16 April 1998, The Causes of Conflict and the Promotion of Durable peace and Sustainable Development in Africa.

In this document, the Secretary-General states the importance of the concept of human security to the working purpose of the UN. “The prevention of conflict begins and ends with the promotion of human security and human development. Ensuring human security is, in the broadest sense, the cardinal mission of the United Nations. Genuine and lasting prevention is the means to achieve that mission.”

5. *UNDP, Globalisation with a Human Face –Human Development Report 1999.*

The 1999 report of the UNDP re-iterates the concept of human security espoused in the 1994 report but places a particular emphasis on the destabilizing impacts of uneven globalisation.

6. *Kofi A. Annan, Millenium Report of the Secretary-General of the UN `We the Peoples – The Role of the United Nations in the 21st Century`.*

The report of UN Secretary-General Kofi Annan for the Millenium Assembly of the United Nations in September 2000 describes “an action plan to make globalization work for people everywhere”. The publication devotes chapters to freedom from want (the development agenda) and freedom from fear (the security agenda). Arguably, the nexus of these two concepts could constitute human security. As the system shifts from the international order of 1945 to the increasingly global world of today, the Secretary-General speaks of “the need for a more human-centered approach to security” and the challenges that lie ahead for world leaders to govern, provide for a sustainable future and renew the United Nations collectively.

III. Economic, social and cultural rights: their impact on Human Security

Después de un período intenso en que la agenda de los países y de los organismos regionales destinaron tiempo y recursos importantes en el problema económico y los efectos de la globalización, con la actual crisis, quizá la economía pase a un segundo plano debido a los asuntos militares y estratégicos que han asumido vitalidad. Sin embargo, hoy más que nunca debe asegurarse el avance económico y la seguridad social del mundo entero, teniendo en mente que los derechos económicos, sociales y culturales cada vez más se manifiestan como aspectos trascendentales en cuanto a la realización de la seguridad humana.

Sin duda, una paz duradera no será posible sin una prosperidad duradera que brinde mayores oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente cuando lo evidente es que el mundo actual no ofrece prosperidad para todos: más de mil millones de personas tienen que luchar para apenas sobrevivir todos los días y muchos no lo logran. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe evidencia detallada acerca de la muerte de millones de personas pobres causada por la falta de los ínfimos recursos necesarios para permanecer con vida donde las pérdidas más terribles son las causadas por enfermedades que sería posible tratar y prevenir, como el sarampión, las infecciones respiratorias, la malaria, la tuberculosis y el sida.⁷

Dentro de los hallazgos obtenidos por la OMS se constata que en los países más pobres, el dinero gastado anualmente en la salud de cada persona asciende a US \$11 por persona cuando en realidad se necesitan US\$ 33 para proveerlas de los servicios sanitarios más indispensables⁸. Desde esa perspectiva y partiendo de los principios de cooperación internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, los países ricos deberían proporcionar alrededor de US\$ 20 por persona para cubrir la diferencia, pero solamente suministran US\$ 2. La ecuación adecuada sería que si la solidaridad no fuera tan escasa, con únicamente que las naciones ricas contribuyeran con una décima parte del 1% de su ingreso nacional o un centavo por cada diez dólares ganados, ello sumaría 25.000 millones de dólares cada año que podrían utilizarse para salvar las vidas de millones de pobres en todo el mundo, especialmente con fines preventivos como la vacunación de niños y la distribución de toldos contra mosquitos que producen la malaria, atención médica general, tratamiento del sida, etc. Ese esfuerzo financiado apropiadamente podría salvar 8 millones de personas cada año.⁹

⁷ Cf. Jeffrey D. Sachs. Presidente de la mesa directiva de la Comisión para la Macroeconomía y la Salud de la Organización Mundial del Comercio. En: Periódico La Nación. Domingo 4 de noviembre de 2001. Pág. 18 A. San José, Costa Rica.

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

Dentro de ese oscuro panorama preocupa ver cómo las tendencias hacia la búsqueda de la prosperidad parecieran endosarle la solución al desarrollo económico mediante el comercio y la globalización por medio el comercio internacional, lo que es una verdad a medias porque el comercio sí beneficiaría a los pobres en el tanto los mercados de los países ricos fueran abiertos para que los pobres vendan lo que producen, pero no siempre es posible lograr el crecimiento a través de las exportaciones en los lugares donde abundan las enfermedades. Por ello, el comercio por sí solo no es suficiente para salvar millones de vidas por enfermedades, lo que requiere de una adecuada y bien enfocada asistencia financiera.

Más importante aún es el entendimiento de que las enfermedades y la pobreza contribuyen a la “falla estatal“, utilizado como término técnico utilizado en “inteligencia“ para referirse a la causa de los colapsos políticos, revoluciones, guerras civiles, terrorismo y golpes de Estado y, por lo tanto, con efectos directos en el aumento de la inseguridad humana. Pareciera que la lógica funciona a la inversa, ya que los países ricos intervienen tardíamente en relación con esas “fallas estatales“ y por intermedio de costosas intervenciones militares, en lugar de trabajar en forma preventiva y anticipada para evitar el colapso.

En última instancia, el problema de fondo radica en la falta de satisfacción de las necesidades básicas de la población traducidas en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para perfilar un estándar mínimo de vida digna.

Es un lugar común que en la enseñanza de los derechos humanos se utilice un discurso muy generalizado para tratar la exigibilidad y “justiciabilidad” de los derechos humanos a partir de una tipología o clasificación de “generaciones” de derechos. Se habla entonces de derechos civiles y políticos o derechos de la primera generación; derechos económicos, sociales y culturales o derechos de la segunda generación y se incorpora una tercera y hasta una cuarta generación de derechos que se refieren a situaciones colectivas como al medio ambiente sano, derecho a la paz, etc.

Sin embargo, se debe anticipar que, desde una perspectiva integral y de indivisibilidad de los derechos humanos, esa distinción no responde a los nuevos desafíos y retos que vindican la interrelación de todos los derechos humanos para dimensionar la visión global del derecho al desarrollo como la realización de todos y cada uno de los derechos humanos, con abstracción de jerarquizaciones instrumentadas en una época de politización e ideologización de los derechos humanos.

Esa clasificación ha sido utilizada también con otros fines que tienden a dar mayor o menor “justiciabilidad” a unos derechos que a otros. Así se dice por ejemplo, que los derechos civiles y políticos o de primera generación se diferencian de los económicos, sociales y culturales o de segunda generación, en que los primeros revisten características que los hacen más fáciles de reclamar ante el Estado por que son menos abstractos que los segundos. Es decir, se ha partido de que los derechos civiles y políticos los viola el Estado mediante una “acción”, a través de sus agentes o funcionarios, o hasta por actos de particulares en ciertos casos muy calificados, que invaden la esfera de los derechos individuales del ciudadano y le ocasiona algún tipo de perjuicio. Hay, por lo tanto, un perjuicio directo que es lo que permite que haya legitimación de actuar y reclamar al Estado, ya sea a través de la víctima de la violación o de sus familiares.

En cambio, se acostumbra decir que los derechos económicos, sociales y culturales se violan, no por una acción, sino por una “omisión” de actuar del Estado que no ha proveído de los

instrumentos, instituciones, presupuesto o condiciones adecuadas para que estos derechos sean realizables (creación de escuelas, colegios, hospitales, políticas públicas, etc.). Estamos hablando de derechos que si bien brindan un beneficio particular, su naturaleza tiende a ser más colectiva a partir del principio de solidaridad y universalidad. Ejemplo de ello es el derecho a la salud, educación, cultura, vivienda digna, propiedad colectiva, trabajo y salario digno y justo, etc. Sin embargo, no es absoluto que el Estado solo viole derechos económicos, sociales y culturales por omisión. Lo hace todos los días por acción, por ejemplo, recortando programas sociales y culturales; disminuyendo el gasto público con recortes presupuestarios que perjudican la educación; emitiendo leyes o medidas administrativas en perjuicio de derechos colectivos de pueblos indígenas; sólo para mencionar algunos ejemplos. Estas circunstancias contribuyen a aumentar la inseguridad humana.

Esa clasificación de los derechos humanos no es viable porque sectoriza y discrimina derechos humanos en función de la ideología por una parte, o por el oportunismo político para no satisfacer derechos colectivos, disque por su falta de justiciabilidad o por problemas de presupuesto y de recursos humanos.

Entonces, tenemos un primer gran obstáculo hacia nuestro desiderátum que es la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos. En otras palabras, al margen de los antagonismos descritos, los derechos humanos no pueden verse a partir de clasificaciones rígidas que no corresponde hacer. La forma de entender el fenómeno no puede ser otra que ver los derechos humanos desde el contorno de su indivisibilidad y universalidad, tal y como lo destacan la mayoría de los instrumentos y documentos internacionales en Derechos Humanos.

Hacia el rompimiento del paradigma tipológico de los derechos humanos

Para iniciar el resquebrajamiento del discurso “convenientemente” oficial de las tipologías de los derechos humanos, –con “oficial” no sólo se quiere hacer alusión a la tesis de Estados,

sino de parte de la misma Doctrina clásica de los derechos humanos-, debemos partir de una definición de derechos humanos relativamente válida para todo el mundo. Como dicho concepto es polémico, si lo definimos como “todas aquellas actividades que el individuo pueda realizar para alcanzar una vida digna con respeto a sus derechos humanos”, podríamos concluir que para “obtener una vida digna” –que es en lo que coinciden todas las definiciones posibles- es necesario que se respete el conjunto de todos los derechos humanos sin distinción o clasificación alguna. Si hilamos un poco más, caemos en cuenta que no estamos hablando de otra cosa que del derecho al desarrollo como realización de todos los derechos humanos.

Entonces, no debe haber prioridades ni divisiones de derechos en términos de su protección, aún cuando es evidente que fueron creadas por razones políticas o de oportunidad.

Es la Declaración de Teherán, de 1968, en ocasión de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la que los defensores de la indivisibilidad de los derechos humanos generalmente toman como punto de partida para desarrollar esa teoría, específicamente sobre la base siguiente:

*“Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible”.*¹⁰

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena (1993) analizó el tema de la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, no sin antes presentarse una gran discusión por los temas universalismo *vis a vis* relativismo cultural. Al Final, la frase conciliadora fue la siguiente:

*All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated.
The international community must treat human rights globally in a fair and equal*

¹⁰ Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán. Proclamación final, artículo 13.

manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.¹¹

Sin embargo, desde antes, con la “internacionalización” y “universalización” de los derechos humanos, la cual podemos ubicar después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que podemos ver, sin mayor esfuerzo, que no había tal separación de derechos.

Más importante que buscar medidas o nuevos instrumentos de implementación de los derechos civiles y políticos para relacionarlos con los económicos, sociales y culturales, recurriendo incluso a “portillos” legales válidos como el derecho a la no discriminación, es entender que la indivisibilidad de los derechos humanos es una realidad que trasciende esas tipologías implantadas.

Por ejemplo, el derecho a la vida no sólo se viola mediante el acto físico de extinguir la existencia de alguien. Hay quizás peores formas de hacerlo que tienen que ver con la restricción o la imposibilidad de tener una vida digna. Así lo ha visto la Corte Interamericana al resolver un caso contencioso en perjuicio de “niños de la calle”:

“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que

¹¹ Punto No. 5.

*le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.*¹²

Y más adelante agregó:

A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”¹³, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida.¹⁴

La marginación extrema de las personas, o peor aún, de grupos ya de por sí vulnerables, hacen insostenible la posición de que los derechos económicos, sociales y culturales son un deber ser o normas meramente programáticas. Ese discurso “oficial” que tanto ha calado para desventaja de una verdadera protección de los derechos humanos, se desdibuja cada vez

¹² Corte I.D.H., *Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”)*, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

¹³ *Convención sobre los Derechos del Niño*, Preámbulo, párr. 6.

¹⁴ *Ibid*, párr. 191.

más cuando la tendencia mundial es hacia el reconocimiento de la integralidad e indivisibilidad de los mismos.

La indivisibilidad de los derechos humanos y la integración e interdependencia de los civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales son parte de la civilización moderna en términos de alcanzar un pleno desarrollo humano. Podemos decir por ejemplo, que “[n]o sólo se viola la libertad de la persona cuando se la ataca física o moralmente sino también cuando se le priva de los medios de vivir con dignidad y se le niegan los requisitos materiales que le son indispensables para la plenitud de su existencia”.¹⁵

Dentro de lo que Amartya Sen llama “the legitimacy critique”¹⁶, en un hecho que los derechos humanos, *todos*, pero especialmente los económicos, sociales y culturales, deben exceder el dominio de lo *potencial* para que lleguen a ser derechos actuales, exigibles y justiciables que trasciendan la propia figura Estatal y no sean meros compromisos de buena ética y voluntad.

¹⁵ Naciones Unidas, “El derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva”, Luis Valencia Rodríguez, E/CN.4/1993/15, 18.12.92, pág. 26 y 27.

¹⁶ Amartya Sen. Development as Freedom.

APPENDIX

Protection of human rights in conflict and post-conflict situations (Colombia case study)

Este fenómeno tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario en lo atinente a la protección directa de los derechos humanos y, especialmente, en lo que hace al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. El derecho humanitario se define como un cuerpo de normas jurídicas de origen convencional o consuetudinario, específicamente aplicados a los conflictos armados internacionales o no internacionales que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto de elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, evitando que se vean afectadas las personas y los bienes protegidos. Comprende la limitación de los medios y métodos de combate (el llamado “Derecho de la Haya y los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977) relativos al alivio de la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; al trato debido a los prisioneros de guerra; a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no internacionales.

Estos temas, especialmente los referidos a la protección de los derechos humanos en casos de conflictos armados de tipo internacional o no internacional, así como los derivados de disturbios o tensiones internas, también se encuentran desarrollados en las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas como se detalla a continuación:

- *Derecho a la paz.* La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1984 la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Igualmente, las Cumbres Mundiales han reflejado una clara preocupación por las situaciones de conflicto que, evidentemente, amenazan o violan la paz, provocando claras violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, generando miles de refugiados y desplazados. La

Declaración de Pekín indica que la paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inextricablemente vinculada al adelanto de la mujer y destaca la función rectora que han desempeñado las mujeres en el movimiento en pro de la paz. Por su parte, en la Conferencia que dio nacimiento al Estatuto de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional, se acuerda que los crímenes tipificados se consideran una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

* *Derechos de asilados, refugiados, desplazados y migrantes.* La situación general que rodea la cuestión de los desplazados internos, es similar a la de los refugiados: la violencia y la persecución suelen convertirse en el motivo central del abandono de sus comunidades de origen. Por ello, tanto el problema de los refugiados como el de los desplazados internos forman parte del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por su parte, las personas que sufren las consecuencias directas de fenómenos migratorios debido a diferentes causas, tienen en el seno de Naciones Unidas un convenio de protección relacionado con los derechos laborales (Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares).

En la Conferencia de Viena y en la Cumbre de El Cairo se resalta el derecho a recibir asilo en caso de persecución, se aborda la problemática del refugio y se solicita el cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario. La Declaración de Copenhague fija el compromiso de los gobiernos para crear condiciones amplias que permitan el regreso voluntario de los refugiados a sus países de origen en condiciones de seguridad y dignidad y el fomento de los mecanismos internacionales para la prestación de asistencia humanitaria y financiera a los refugiados y a los países de acogida. En el Programa de Hábitat se señala que los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación del medio ambiente, junto con la falta de paz y seguridad, las violaciones a los derechos humanos y la disparidad en el desarrollo de instituciones judiciales y democráticas, son factores que influyen en la migración internacional.

- *Infancia y mujeres.* La Cumbre Mundial en favor de la Infancia destaca la necesidad de otorgar especial protección a los niños en casos de conflicto armado. Una disposición similar tiene el documento emanado del Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que además manifiesta que la mujer es particularmente vulnerable en casos de conflicto armado, como posible víctima de asesinatos, torturas, violaciones, incluso sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzados.¹⁷ Por su parte, la Plataforma de Acción de Pekín aborda la cuestión de la mujer y los conflictos armados, afirmando que la paz está indisolublemente unida a la igualdad entre las mujeres y los hombres y al desarrollo. Hace énfasis en que el convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977, establece que las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra los tratos humillantes y degradantes, contra la violación, la prostitución forzada y todo ataque a su pudor. Tomando los documentos aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos repite que las violaciones a los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales.¹⁸

Además, la Plataforma de Acción de Pekín, al reconocer que el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonales afecta especialmente a las mujeres y los niños, indica que los gobiernos deben comprometerse a tratar activamente de ratificar, si no lo han hecho aún, la convención de 1981 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, especialmente el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, con miras a que su ratificación sea universal para el año 2000.¹⁹

¹⁷ Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, Punto 25; Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, I.7.27a; y I. 8. 14 a.

¹⁸ Plataforma de Acción de Pekín, Capítulo IV. E.

¹⁹ *Ibid*, Capítulo IV.E.2. e.i.

- *Desarrollo sostenible.* En la Declaración de Río de 1992 se indica que la guerra es por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar el derecho internacional, proporcionando protección al medio ambiente en épocas de conflicto armado.²⁰
- *Delitos internacionales.* El Estatuto de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional pone bajo competencia de la Corte y en la categoría de crímenes de guerra a las infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, así como otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y las violaciones graves al artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra. Lo mismo ocurre con otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, cuando se cometan como parte de un plan o política, o en gran escala.²¹
- *Reasentamiento de la población.* El Programa de Hábitat indica que al preparar y ejecutar actividades de socorro, rehabilitación, reconstrucción y reasentamiento después de un desastre, los gobiernos y las autoridades locales, en colaboración con todas las partes interesadas, deben apoyar la labor de remoción de minas terrestres antipersonales inmediatamente después del cese del conflicto armado y reconocer, apoyar y facilitar la función de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de sus sociedades nacionales miembros, en la prevención de los desastres, la preparación para casos de desastre, la mitigación de sus efectos y la intervención en esos casos, a los niveles local, nacional e internacional y alentar al comité Internacional de la Cruz Roja a que en tiempo de conflicto armado, adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos y de las personas desplazadas.²²

²⁰ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 24.

²¹ Estatuto de Roma de la corte Penal Internacional, Art. 8.

²² Programa de Hábitat, Punto 176 i, l y m.

Guiding Principles on Internal Displacement

In 1992, in response to growing international concern about the large number of internally displaced persons throughout the world and their need for assistance and protection, the Commission on Human Rights requested the United Nations Secretary-General to appoint a representative on internally displaced persons (Commission resolution 1992/73). Francis M. Deng (Sudan) was appointed to the position.

The mandate of the Representative, it will be recalled, initially established by the Commission on Human Rights in 1992, was to study the causes and consequences of internal displacement, both generically and specifically in affected countries. It has evolved, at the request of the Commission and the General Assembly, into four main areas of work:

(a) Developing a normative framework for the internally displaced and promoting the dissemination and application of the Guiding Principles;

(b) Evaluating international and regional institutional arrangements for the internally displaced;

(c) Undertaking country missions to evaluate conditions on the ground and dialogue with Governments and other actors;

(d) Under the auspices of independent research institutions, carrying out research into various aspects of the problem of internal displacement, including acting as a “research arm” for the United Nations system.

Eight years after the General Assembly first considered the problem, the international community continues to seek ways and means to respond effectively and comprehensively to the global problem of internal displacement. To be sure, some positive steps have been taken during this period. In particular, international visibility has been raised so that the needs of internally displaced persons are universally

acknowledged and understood. In addition, a normative framework has been developed for meeting the protection and assistance needs of the internally displaced, as manifested in the Guiding Principles on Internal Displacement, which provide useful guidance to Governments and other relevant actors. Furthermore, increased focus in the past 18 months on the need for more effective international institutional arrangements for responding to crises of internal displacement has resulted in encouraging moves towards a more coordinated response on the part of the United Nations. It is encouraging to note developments in the form of the Guiding Principles on Internal Displacement, and important and often quite innovative efforts are being pursued by an increasing number of States and intergovernmental, regional and non-governmental organizations to promote, disseminate and apply the Principles. As concerns institutional arrangements, in the past months progress has been made towards a better coordinated international response.

Regional organizations also continue to devote attention to the promotion and application of the Principles. In resolutions 54/167 and 2001/54, the General Assembly and the Commission, respectively, noted with appreciation that regional organizations are making use of the Guiding Principles in their work and encouraged their further dissemination and application. In particular, the Commission welcomed initiatives undertaken by the Organisation of African Unity (OAU), the Organization of American States (OAS) and OSCE.

Such developments notwithstanding, the global crisis of internal displacement remains acute, affecting some 20-25 million persons in at least 40 countries worldwide, uprooting them from their homes, exposing them to physical and psychological dangers, and depriving them of basic needs. Consequently, the need to translate normative and institutional responses into effective field-based strategies for responding to the protection and assistance needs of internally displaced persons remains pressing.

Colombia Case

La intensificación y ampliación geográfica del conflicto armado interno en Colombia, se ha traducido en una crisis agravada del problema del desplazamiento y ha afectado prácticamente a todo el país, con exclusión de unos cuantos Departamentos aislados. Un examen del perfil de la población afectada pone de manifiesto que el desplazamiento es un problema que afecta principalmente a los sectores más marginados de la sociedad. Las víctimas del desplazamiento son esencialmente campesinos que viven en las zonas bajo la influencia de los paramilitares o los guerrilleros. Se ven particularmente afectados los miembros de las comunidades autóctonas y afrocolombianas del país, sobre todo en los Departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Cauca, Meta, Caqueta y Guaviare, en que se haya concentrada una gran parte de esas poblaciones. Los pueblos indígenas emberá-katio, de la región del Alto Sinú, Departamento de Córdoba, se ven especialmente amenazados, ya que han tenido que hacer frente a constantes amenazas y muchos de sus dirigentes han sido asesinados.²³

A number of significant developments have taken place at the national level as concerns the promotion and application of the the Guiding Principles on Internal Displacement since the Representative last reported to the General Assembly. In Colombia, for example, the Constitutional Court has delivered two judgements which cite the Guiding Principles in support of actions in favour of the internally displaced. In one of those judgements, the Court, while noting that the Guiding Principles do not constitute an international treaty, stated that they clarify the gaps and grey areas in existing international law and have been widely accepted by international human rights organizations and should, therefore, be used as the parameters for the creation of rules and for the interpretation of Law 387 of 1997 regarding forced displacement. In addition, the Office of the President of Colombia cites the Principles as the inspiration

²³ Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN. 4/2000/83/Add.1 del 11 de enero de 2000. párrs. 30, 31.

for its integrated policy for internally displaced persons. The Ombudsman's Office included the Principles in its public awareness campaign about internal displacement, and the Red de Solidaridad Social, the government agency focusing on internal displacement, included the Principles in its book, *Attention to the Population Displaced by the Armed Conflict*. Furthermore, the Colombian Ministry of Health and the Pan American Health Organization (PAHO) have translated *Handbook for Applying the Guiding Principles* into Spanish so as to promote its use in Colombia and other countries in the Americas.

In Colombia, the Representative's use of the Guiding Principles as a basis for dialogue was well received by government officials. A number of them had indeed prepared in advance analyses of the situation of internal displacement in Colombia on the basis of the Guiding Principles. The Director of the Human Rights Unit of the Ministry of the Interior expressed the view that the Guiding Principles should be regarded as carrying a morally binding force.

The Report of the Representative of the Secretary-General on internally displaced persons submitted in accordance with Commission resolution 1999/47, Addendum Profiles in displacement: follow-up mission to Colombia²⁴, is an excellent study about the situation of internal displaced persons. Some of its conclusions are the following.

Antecedents. The situation of internal displacement in Colombia is among the gravest in the world. There are over a million internally displaced persons in the country with new displacements continuing to occur. The vast majority of the displaced have been uprooted from their homes in the last few years because of the sharp deterioration in the security situation. The problem, however, is a long-standing one, stretching back decades.

²⁴ E/CN.4/2000/83/Add.1. 11 January 2000.

Political violence associated with internal armed conflict and characterized by serious violations of international human rights and humanitarian law is the primary cause of displacement. However, displacement in Colombia is not merely incidental to the armed conflict but is also a deliberate strategy of war. Indeed, rarely is there direct confrontation among armed groups (that is, the paramilitaries, guerrilla groups, and the armed forces/police). Rather, these armed groups attempt to settle their scores by attacking civilians suspected of being associated with the “other” side, and they do so with such severity as to leave those whose physical security is threatened with no choice but to flee.

Yet, the threats to physical security which the displaced flee to escape often only follow them into the communities in which they seek refuge. The very fact of having fled typically only heightens suspicions of allegiance with a particular armed actor and intensifies the risk of being targeted. Stigmatized and fearing for their lives, many of the displaced seek safety in anonymity, attempting to blend into the communities of urban poor. Having abandoned their homes, property and livelihood for conditions of destitution and continued insecurity, they constitute an extremely vulnerable segment of society. At the same time, displaced persons have begun to organize to defend their rights, but the leaders of their organizations and those of the local non-governmental organizations who try to help them are increasingly being targeted and killed by armed groups.

On the positive side, if one could be said to exist under such tragic circumstances, the Government of Colombia now acknowledges the problem of internal displacement and has proven itself open to international cooperation for addressing it.

Statistics. At the time of the Representative’s first mission, there existed no precise and agreed-upon statistics on the number of internally displaced persons in Colombia. While this remains true today, important efforts have been undertaken since 1994 to better assess the magnitude of the problem. In 1995, the Episcopal Conference of Colombia published a study on the problem of internal displacement in Colombia which, through a survey of 1,170 displaced persons in parishes throughout the country, estimated that 586,261 people

had been displaced between January 1985 and August 1994.¹ As a follow-up to this study, the *Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento* (CODHES) created an information system on displacement, known as SISDES and supported by the United Nations Children's Fund (UNICEF), to estimate the number of displaced on an annual basis. The following figures reflect the results of their estimates:

Year	New displaced	Total IDP population	% increase
1985-1994	586 261	586 261	-
1995	89 510	675 771	15
1996	181 000	856 771	26
1997	257 000	1 113 771	30
1998	308 000	1 421 771	28

According to these figures, 746,000 persons became internally displaced between 1996 and 1998, which is considerably higher than the Government's estimate of 381,755 for the same period.ⁱⁱ As both CODHES and the Government stressed, these figures are merely statistical projections, which are by no means precise. However, the significant discrepancy between them is due to variations in methodological approaches, including the absence of common criteria for data collection. For instance, while for CODHES the main criterion used in its calculation is the factual situation of being internally displaced, the Manager of the Government's *Red de Solidaridad* noted that the figure used by his office counts only those displaced considered to be in need of attention. In a situation, such as in Colombia, of long-standing internal displacement stretching over decades, there also arises the question of when to stop counting persons as displaced. This is indeed a complex question. In the absence of clear guidelines as to when displacement ends, there is a need for a case-by-case approach taking into account situational factors determining the possibilities for return home or resettlement as a durable solution.ⁱⁱⁱ A further factor complicating calculations of the number of the internally displaced in Colombia is the reluctance of many of the displaced to identify themselves as such, for fear of further threats to their safety.

Estimates of the number of internally displaced persons cited over the course of the follow-up mission ranged from 300,000 to 1.5 million. The majority of independent observers with whom the Representative spoke tended to place the number at the higher end of this range, surpassing the 1 million mark. Notably, the Government's *Defensoría del Pueblo*

cites the CODHES figure of 1.5 million displaced in the past 10 years. According to this figure, at least 1 in every 40 Colombians is internally displaced and, in global terms, Colombia has one of the largest populations of internally displaced persons in the world.

Conflict as the context of displacement. As in so many other situations that the Representative has studied, internal displacement in Colombia stems from political violence associated with armed conflict and characterized by serious violations of human rights and humanitarian law.

To begin with, it is important to recall the complexity of the conflict owing to the multiplicity of actors and interests involved. First, there are the State armed forces (comprising the army, navy and air force) and National Police, both of which are attached to the Ministry of Defence. Second, there are various paramilitary groups, organized under an umbrella group known as *Autodefensas Unidas de Colombia* (AUC). Paramilitary activity has grown significantly in recent years. Though no longer enjoying legal authority, as was the case from 1968 to 1989, paramilitary structures effectively were institutionalized during the previous administration through the existence of “special private security and vigilante services” (previously known as “Convivir”) legally authorized to carry arms and perform functions of public order similar to those of the armed forces and police. These armed groups often have operated without effective control or adequate supervision on the part of the authorities and, as OHCHR reports, their activities are difficult to distinguish from those of the paramilitaries as “in many cases there are areas in which they coincide, converge or supplement or replace each other” (E/CN.4/1998/16, para. 92). It should be noted that beginning in 1998, the Government introduced measures modifying the functions of the armed groups and imposing stricter control of their activities, most notably by prohibiting their use of automatic weapons, which resulted in a reduction in the number of these groups. Third, there are the guerrilla forces which are organized into several distinct and autonomous groups. Foremost among these is the *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular* (FARC-EP), which is the strongest of the guerrilla forces

militarily. Comparatively smaller and possessing less military strength is the *Ejército de Liberación Nacional* (ELN) and the *Ejército Popular de Liberación* (EPL). A significant guerrilla presence is reported in at least half of the municipalities in Colombia.

The systematic violations of human rights law and grave breaches of humanitarian law that characterize the conflict^{iv} are committed by all sides, but in recent years, paramilitary operations have been identified as causing most of the violations and displacement. Extrajudicial and arbitrary executions (often in the form of massacres or collective killings), enforced disappearances, torture, hostage-taking and attacks against the civilian population and civilian targets are common features of the conflict. With the intensification of the conflict in recent years, these violations of human rights and humanitarian law have significantly increased, as has the displacement that they and the general situation of violence engender. Also related to the conflict, a large number of families have fled in order to avoid the forcible recruitment of their children by guerrilla forces.

One of the more important developments of recent years is that civilians have come to be considered by the parties to the conflict as a military objective, with the result that the non-combatant and protected status of the civilian population has become severely blurred. Areas are “cleansed” of the support base they are suspected of providing the “enemy” through the mass displacement of entire communities and then, especially when the land concerned is of strategic value in military or economic terms, are repopulated by supporters of the forces conducting the displacement. These mass displacements frequently are announced in advance, with those who fail to follow the order to move finding themselves at risk of massacre or other serious attacks upon their physical security.

Economic interests underlying the violence and conflict also are factors inducing displacement. As part of a process of so-called “counter-agrarian reform” (which at the time of the Representative’s first mission in 1994 had resulted in an estimated 3 per cent of landowners controlling more than 70 percent of the arable land in the country), displacement is often a tool for acquiring land for the benefit of large landowners, narco-

traffickers, as well as private enterprises planning large-scale projects for the exploitation of natural resources. The fact that most peasants do not possess legal title to the land makes them easy targets for this process, described by the *Defensor del Pueblo* as “land-reform taking place at gunpoint”. OHCHR reports having received testimony from a number of small and medium-scale farmers “who have been robbed of their land by paramilitaries in the service of drug traffickers or local landowners, or who have had to sell their land cheaply before leaving the region under death threats” (E/CN.4/1998/16, para. 98). A similar pattern of displacement has also appeared in relation to the exploration and exploitation of natural resources and the implementation of large-scale development projects, in some cases concerning not strictly domestic economic interests but also the objectives of multinational corporations. It is thus not without coincidence that the areas where guerrilla and paramilitary activity is most intense tend to be rich in natural resources.

Since the Representative’s last mission, significant changes have occurred with respect to responsibility for displacement, as the following figures compiled by CODHES demonstrate.

Year	Armed Forces and Police	Paramilitaries	Guerrillas	Others
1985-1994	27%	21%	32%	20%
1995	19%	35%	26%	20%
1996	16%	33%	28%	23%
1997	6%	54%	29%	11%

While the level of responsibility of guerrilla forces has remained relatively constant, since 1994, there has been a marked decrease in the level of responsibility of the armed forces and the police, and a simultaneous three-fold increase in the level of responsibility on the part of the paramilitaries. Underlying and explaining this trend is the collaboration that exists between the paramilitaries and the armed forces and the police. In 1998, OHCHR

reported that “a considerable number of the acts of violence by the paramilitaries are carried out with the tolerance, not to say complicity, of public servants, particularly members of the armed forces and National Police” (E/CN.4/1998/16, para. 90). In the words of the *Defensor del Pueblo*, paramilitary groups “have become the illegal arm of the armed forces and police, for whom they carry out the dirty work which the armed forces and police cannot do as authorities subject to the rule of law”. Paramilitary activity thus represents “a new form of exercising illegal repression with no strings attached”.^v In 1999, the Chairperson of the Commission on Human Rights, in a statement on the situation of human rights in Colombia made on behalf of the Commission, urged the Government “to intensify to the maximum political, administrative, judicial and other appropriate measures on official bodies suspected of supporting ‘paramilitary’ groups”.^{vi}

The imperative of ending the long-standing conflict was a central issue in the presidential elections of 1997. Since taking office in mid-1998, the Pastrana administration has given an important boost to the peace effort by engaging in a peace initiative with the FARC-EP. As part of this process, on 7 November 1998, President Pastrana ordered the withdrawal, for an initial three-month period, of the armed forces from five municipalities in the departments of Meta and Guaviare in the southern part of the country prior to the formal commencement of peace talks two months later. The period of withdrawal has since been extended several times. Serious allegations of arbitrary action by FARC in this area have underscored the importance of establishing within the framework of the peace talks minimum rules to be respected by the guerrilla forces in this zone.

On 6 May 1999, those engaged in the peace process issued a 12-point “Common Agenda for Change Towards a New Colombia” stressing the importance of a negotiated political solution to the conflict and including among its concerns respect for international humanitarian law, justice, political reform, a comprehensive agrarian policy and commitments to combat narco-trafficking and corruption. Unfortunately, the issue of displacement is not expressly included in the agenda.

Patterns of displacement. The intensification and geographical expansion of the conflict in recent years has been mirrored by a widening of the displacement crisis to engulf almost the entire country, affecting all but a few isolated departments. The principally affected areas are Antioquia, Bolívar, Santander, Córdoba, Magdalena, Chocó, César, Sucre, Meta, Putumayo, Valle de Cauca, Caquetá, Cauca and Guaviare. The forced displacement in Antioquia accounts for 25 per cent of the national total.

An examination of the profile of the population affected reveals that displacement is a plight principally of the more marginalized sectors of society. As was the case in 1994, the victims of displacement are predominantly peasants, or *campesinos* as they are known, living in areas of paramilitary or guerrilla influence. Particularly affected are members of the country's indigenous and Afro-Colombian communities, especially in the departments of Chocó, Antioquia, Córdoba, Cauca, Meta, Caqueta and Guaviare, where large numbers of these populations are concentrated. The Emberá-katio indigenous peoples of the region of Alto Sinú in the department of Córdoba have been at particularly high risk, having faced constant threats and with many of their leaders having been killed. At the same time, the phenomenon of "political cleansing", which targets trade union leaders, political activists, community leaders, mayors and town council members, judges and public prosecutors, journalists, human rights activists, teachers and other segments of the urban population, has resulted in an increasing number of these groups of people joining the ranks of the displaced.

Women and children continue to make up the vast majority - approximately 80 per cent - of the displaced. Some 58 percent of the internally displaced are women while 55 per cent are under 18 years of age. According to a December 1998 report of the *Defensoría del Pueblo* and UNICEF, at least 620,000 children have been affected by displacement. The attention given to the plight of internally displaced children by the Special Representative of the Secretary-General on Children and Armed Conflict during his mission to Colombia, which immediately followed that of the Representative, is most welcome.^{vii} Displacement has the effect of eroding traditional family structures, particularly as a result of male members of

the family having been killed, having disappeared or being compelled to seek safety or work elsewhere. An estimated 36 to 39 per cent of displaced households are headed by women.^{viii}

Patterns of flight continue to be predominantly from rural to urban areas. Moreover, in a phenomenon known as “intra-urban displacement”, displacement to urban areas tends to occur incrementally, as continued threats to their physical security and inadequate responses to their assistance needs compel the displaced to flee from smaller cities to increasingly larger centres. A large number ultimately make their way to Bogotá (it is estimated that 37 displaced families arrive in the capital city every day) and other major cities including Medellín, Cartagena and Barranquilla. Within the cities, the displaced tend to be concentrated in the slums and shanty towns, where they find themselves among the poorest of the urban poor. Others may be accommodated by family members for extended periods of time. On account of their rural origins, the displaced typically experience difficulties in adapting to urban life.

An important change in the pattern of displacement has been the advent in 1997, for the first time in Colombia, of camp-like settings of internally displaced persons, such as the camp in Pavarando (Antioquia) and the concentration of internally displaced persons in the coliseum in Turbo (Antioquia). Though the considerable media coverage of the Pavarando camp, where internally displaced persons languished in impoverished conditions for up to two years, served to raise awareness of the phenomenon of internal displacement in Colombia, it also laid bare the inadequate response on the part of the authorities to addressing the phenomenon of mass displacement.

Another noteworthy development is the advent of an international dimension to the displacement crisis as a result of cross-border flight. Though the militarization of border areas and the existence of natural obstacles such as mountains, rivers and jungles continue to make it difficult for the displaced to flee the country, the number attempting to do so has noticeably increased. In the first half of 1997, a deterioration of the security conditions in

the border areas began to prompt the flight of large numbers of persons into Panama and, subsequently, Venezuela and Ecuador. However, most of the displaced who manage to reach these countries are not recognized as refugees but as undocumented migrants, many of whom are sent back against their will.^{ix} The development of the displacement crisis to involve an element of cross-border flight has had important implications for the international response, namely the involvement of UNHCR, which will be discussed below.

In another important development, UNHCR opened an office in Colombia in June 1998. In 1997, the Representative had written to the United Nations High Commissioner for Refugees to encourage her Office to establish a presence in the country, including in the field. Responding to the situation of internal displacement is a central component of UNHCR's activities in Colombia, with a special programme having been developed for this purpose. The objectives of the programme are twofold: to support an effective, integrated and coordinated State and civil society response in favour of the internally displaced, based on fundamental protection principles and with special emphasis on the national institutional framework; and to contribute to the initiatives of the peace process by reinforcing the response to humanitarian concerns linked to internal displacement. Activities undertaken towards these aims comprise: (i) strengthening the overall legal and institutional national frameworks for responding to the phenomenon of internal displacement; (ii) promoting and supporting the elaboration of protection strategies by the Government of Colombia with a view to preventing displacement; (iii) improving the emergency response in order to fully meet the needs of the displaced; (iv) advocating safe solutions to the situation of the internally displaced, including through promoting the direct participation of the internally displaced in the process of finding safe solutions; (v) advocating and disseminating activities to raise public awareness of the internally displaced, secure the necessary resources to respond to their needs and integrate the issue of internal displacement into the agenda of the peace negotiations. This programme, intended to run from July 1999 to December 2000, anticipates as its end results: the establishment at the State level of a viable national institutional capacity, equipped with the requisite technical and managerial skills to assess, monitor and respond to the needs of the internally displaced in cooperation with civil

society institutions; and a mitigation of the plight of the internally displaced, especially through enhanced physical security and access to essential rights and services.

Physical security of the displaced. There is ample evidence, as the *Defensoría del Pueblo*, local NGOs and international agencies alike indicated in reference to specific cases, that guarantees of the physical security of internally displaced persons are not being observed. Their right to life and physical integrity are violated daily.

Moreover, flight often offers no respite from protection problems, with the displaced persons frequently finding threats to their physical security also in the communities where they seek refuge. As earlier noted, the very fact of having fled tends to heighten suspicions of their sympathies towards one party to the conflict or another and thereby to intensify their risk of being targeted. “We feel very unprotected”, internally displaced persons told the Representative.

The authorities, they said, “do not take seriously” the threats to physical security brought to their attention. As a result, many of the displaced do not even dare to approach the authorities, for fear of exposing themselves to further suspicion and threats.

The staff of international humanitarian organizations also are at increasing risk, leading to the recent withdrawal or scaling back of the activities of a number of organizations in certain areas. Guarantees for their security are a critical precondition for an enhanced international presence.

Education. Particularly glaring is the fact, reported by the *Defensoría del Pueblo* and confirmed by local and international NGOs, that only an estimated 15 per cent of internally displaced children receive some form of education. This low attendance rate is due to a number of factors. Internally displaced families find that they are not able to afford the cost of books and uniforms; though the amount may be small - the figure of \$5 or \$10 was mentioned - this is money that they simply do not have. Another explanation is that the

desperate economic situation of the displaced compels a large number of displaced children to enter the informal labour market, including prostitution. A further impediment is the lack of teachers, who, it was noted above, are among the targets of “political cleansing”. The discrimination that internally displaced persons face also deters children from attending school: one woman recounted that her son was told by his teacher “no wonder you are so stupid - you are a displaced”.

Those displaced children who do attend school tend to demonstrate poor academic performance on account of experiencing high rates of cognitive disorders and memory loss, malnutrition and psycho-social problems. The authorities should, in accordance with the Guiding Principles, ensure that displaced children receive education which is free and compulsory at the primary level and that education facilities be made available to internally displaced persons, in particular adolescents and women, as soon as conditions permit.

Employment and income-generation. The internally displaced stressed that employment and income-generation is a priority concern. Coming mostly from rural areas, the displaced arrive in the cities to find that the pressure for money just to buy food and pay rent or buy materials to build shelter is immediate and enormous. Support for “social and economic consolidation and stabilization” is one of the main components of the National Plan for the Internally Displaced, reflected in law 387.

However, the economic downturn that the country has been experiencing since 1997, owing to a decrease in the overall economic growth rate, makes meaningful economic activity hard to find. Unemployment rates have reached 20 per cent (up to 30 per cent in certain cities according to some). For the displaced, the search for work is further complicated by the stigma and suspicion associated with their situation and their frequent lack of education and urban job skills. The type of income-generating activities in which internally displaced persons engage tend to be low-paying, temporary jobs with few or little social benefits such as construction work for men and domestic work for women. Sexual abuse suffered by housemaids is considered to be widespread.^x Street vending of items such as food, trinkets

or housewares is common among the displaced but brings only meagre earnings. Large numbers of displaced women and young girls reportedly find that they have no alternative but to resort to prostitution.

As alternative means of employment and income generation, internally displaced persons suggested that they be hired to work on public works projects and that the involvement of the private sector in creating income-generating opportunities for them be encouraged. WFP's microcredit programme for displaced indigenous communities was cited as an important example of a targeted intervention responding to the particular needs of these communities. Internally displaced women stressed the need for skills training, microenterprise projects and microcredit schemes.

Information. Internally displaced persons generally do not have clear information about their entitlements under national policy and the procedures for accessing these. The *Defensor del Pueblo*, in his helpful analysis of the situation of internal displacement, emphasized the right of the internally displaced to information - information about what is to be provided by the State and how to go about obtaining it. Some local authorities admitted that the internally displaced do not have sufficient information, raising once again the central theme of needing to clarify and provide guidance to all those involved, authorities and internally displaced persons alike, on the content of the law and the modalities for its implementation. The national workshop of internally displaced women made a suggestion to correct this lacuna: it called for the production of a booklet to provide internally displaced persons with information on the benefits to which they may be entitled under the law, the institutional procedures involved, and the various government and NGO programmes for which they may be eligible. This is a concrete and low-cost measure that could make an important difference in the lives of the internally displaced.

-
- ⁱ. Conferencia Episcopal de Colombia, Derechos Humanos: Desplazados por la Violencia, Santafé de Bogotá, Kimpres, 1995.
- ⁱⁱ. Presidency of the Republic, *Segundo Informe de la Gestión Estatal en Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia*, 16 March 1999.
- ⁱⁱⁱ. See Roberta Cohen and Francis M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement, Washington, D.C., Brookings Institution, 1998, pp. 35-38.
- ^{iv}. For detailed analyses of the violations of international human rights law and international humanitarian law occurring in Colombia, see the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Office in Colombia (E/CN.4/1999/8); Human Rights Watch, War Without Quarter: Colombia and International Humanitarian Law (October 1998); Amnesty International, Just What do We Have to Do to Stay Alive?: Colombia's Internally Displaced: Dispossessed and Exiled in Their Own Land (October 1997); Inter-American Commission on Human Rights, Third Report on the Human Rights Situation in Colombia (26 February 1999).
- ^v Fourth Report of the People's Advocate to the Congress of Colombia, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 59-60.
- ^{vi} E/1999/23 - E/CN.4/1999/167, para. 32.
- ^{vii} See the report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict (A/54/430) paras. 122-127.
- ^{viii} *Segundo Informe de la Gestión Estatal en Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia*, *op. cit.*, p. 8; Women's Commission for Refugee Women & Children, A Charade of Concern: The Abandonment of Colombia's Forcibly Displaced, New York, May 1999, p. 2.
- ^{ix} See U.S. Committee for Refugees, Colombia's Silent Crisis: One Million Displaced by Violence, Washington, D.C., U.S. Committee for Refugees, March 1998, pp. 16-17.
- ^x Obregon and Stavropoulou, *op. cit.*, p. 419.